

Santiago, tres de mayo de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

El día veintinueve de abril del año en curso, ante este Tribunal, cuya sala fue presidida por la magistrada Cristina Cabello Muñoz, y estuvo integrada, además, por los jueces Cristian Soto Galdames, como tercer integrante, y Cristian Fuentealba Zamora, como redactor, se llevó a efecto la audiencia de juicio oral en la causa **RUC N° 2300120846-2, RIT N° 118-2024**, seguida en contra de **VÍCTOR VICENCIO ÁLVAREZ VÁSQUEZ**, chileno, cédula de identidad N° 16.041.944-K, nacido el día 13 de febrero de 1985, soltero, comerciante ambulante, domiciliado en calle Las Campanulas N° 179, comuna de Huechuraba, actualmente en prisión preventiva, en este proceso, en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina II.

Sostuvo la acusación el fiscal adjunto César Urzúa Miranda; por su parte, la representación del encartado, en el juicio, estuvo a cargo de su abogado de confianza Alejandro Pardo Gómez.

PRIMERO: Acusación. Que los hechos fundantes de la imputación fiscal fueron del siguiente tenor:

“El 31 de enero de 2023, siendo aproximadamente las 16:00 horas, en el interior de Parque Forestal, a la altura de calle José Miguel de la Barra N° 390, comuna de Santiago, el acusado Víctor Vicencio Álvarez Vásquez abordó a las víctimas Constanza Valentina Saavedra Zúñiga, Michelle Valentina Ramírez Jara y Cecilia Andrea Osorio Huerta, quienes se encontraban sentadas en dicho lugar, procediendo primero a solicitarles dinero y luego a amenazarlas de agresión, exigiéndole la entrega de especies, exhibiéndoles un elemento similar a la empuñadura de un arma de fuego, que mantenía al interior de una mochila que portaba, sustrayéndole a Saavedra Zúñiga un billete de \$10.000, para luego, al advertir que portaban teléfonos celulares, señalarles “entreguen todas sus cagadas de celulares o les voy a pegar”, para luego sustraerle a Saavedra Zúñiga su teléfono celular marca Apple, modelo iPhone 2, color morado; a Ramírez Jara la suma de \$600 y 2 teléfonos celulares marca Samsung, modelo A3s, color negro y Apple, modelo Iphone, color gris y a Osorio Huerta la suma de \$5.500 en moneda nacional y su teléfono celular marca Motorola, modelo One Macro, color celeste con carcasa de gatos, para acto seguido huir con las especies sustraídas, siendo seguido por las víctimas y sindicados a personal de carabineros, quienes procedieron a su detención, recuperando las especies sustraídas.”

A juicio del Ministerio Público, los hechos anteriormente descritos son constitutivos de un delito consumado de robo con intimidación, tipificado en el artículo 436 inciso primero, en relación con los artículos 432 y 439, todos del Código Penal, atribuyéndole al encausado una intervención en calidad de autor, conforme al artículo 15 del texto legal precedentemente citado.

No fueron invocadas circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal.

En lo concerniente a su pretensión punitiva, y previa enmienda de la indicada en la acusación, el Ministerio Público, conforme fuera indicado en sus alegatos de apertura y

clausura, solicitó la imposición de diez años de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias legales correspondientes y el pago de las costas de la causa, todo ello sin perjuicio, además, de lo preceptuado en la Ley N° 19.970, sobre Registro Nacional de ADN.

SEGUNDO: Alegatos de apertura y clausura del Ministerio Público. Que en su **discurso de inicio**, el representante del órgano persecutor, en síntesis, reiteró el contenido de su imputación en estrados, solicitando la dictación de un veredicto condenatorio. Indicó al efecto que el acusado, en el Parque Forestal, intimidó a tres estudiantes mujeres, haciéndose con ello de diversas especies, para luego darse a la fuga. Agregó, que lo anterior sería narrado por las víctimas y por los dos funcionarios policiales que intervinieron en la detención del imputado, todo ello aunado a las fotografías tanto de las especies recuperadas como de las vestimentas del acusado. Finalizando, señaló que la pena solicitada correspondía a la de diez años de presidio, extensión que se fundamentaba en el mayor disvalor de la acción, puesto que pese a tratarse de una sola acción la misma afectó a tres víctimas.

Durante su **alegato de clausura**, señaló, en resumen, que durante el juicio se acreditó la existencia del ilícito y participación del acusado en el mismo, de tal manera que correspondía la dictación de un veredicto condenatorio. Añadió, que las tres víctimas reconocieron al acusado como la persona que se les acercó pidiéndoles dinero, quien luego se puso agresivo, y que después de ello se verificó la intimidación, con malas palabras, exigiéndoles que le entregaran dinero, para posteriormente obligarlas a que le pasaran todo lo que tenían. Puntualizó, que en ese contexto el imputado incluso refirió a las ofendidas que habían otros “locos” que les iba a pegar, mostrándoles, además, una especie de mango que las víctimas creyeron que era de una pistola. Agregó que pese a que no se encontró el arma, no podía perderse de vista la totalidad de la actuación del imputado, pues las víctimas eran tres mujeres de veinte años, frente a un sujeto grande, razón por la cual, incluso en caso de prescindirse de dicho elemento, las anteriores circunstancias eran capaces para infundirles temor en la manifestación o entrega de sus especies. Indicó, además, que el acusado nunca prestó declaración durante la investigación, siendo el caso que la versión que entregó en el juicio resultaba bastante dudosa, sin perjuicio de lo cual igualmente admitió haber interactuando con las víctimas, entre tres y cinco minutos, y que les habló fuerte. Concluyendo su intervención, reiteró los fundamentos esgrimidos en su alegato de apertura, de cara a fundar la imposición de la pena principal en el *quantum* ya indicado en dicha oportunidad procesal.

No hizo uso de réplica.

TERCERO: Alegatos de apertura y clausura de la defensa. Que la defensa indicó, en su **alegato de inicio**, en síntesis, que quedaría acreditado que su representado no tuvo participación en el ilícito materia de la acusación, puesto que no mantenía ningún arma con la cual intimidar a la víctimas, tratándose además de una persona en situación de calle, quien, por lo mismo, sólo les pidió comida a estas últimas, de tal manera que procedía su absolución

Durante su **discurso de clausura**, indicó, en resumen, que el acusado, además de situarse en el lugar de los hechos, reconoció haber pedido dinero a las víctimas, y que luego de ello les solicitó sus teléfonos celulares, negando, eso sí, haberlas intimidado con algún arma. Agregó que, sin embargo, los funcionarios de Carabineros afirmaron que la persona detenida iba caminando, lo que contrasta con el testimonio de las víctimas, quienes señalaron que éste se fue en bicicleta. Puntualizó, que lo verdaderamente relevante estriba en la circunstancia de que no se encontró en poder de su representado arma alguna, así como también, que éste se hallaba, a diferencia de las víctimas, que eran tres, en inferioridad numérica, de tal manera que, en su concepto, no resultó acreditada la intimidación que exige el ilícito objeto de la acusación.

CUARTO: Convenciones probatorias. Que según se consigna en el fundamento tercero del auto de apertura de juicio oral, los intervinientes no acordaron convenciones probatorias.

QUINTO: Declaración del acusado. Que en la oportunidad prevista en el artículo 326 del Código Procesal Penal, y previa información de sus derechos por parte del Tribunal, el acusado renunció a su derecho a guardar silencio, accediendo a prestar declaración como medio de defensa.

SEXTO: Prueba rendida por el Ministerio Público. Que el órgano persecutor rindió, durante la audiencia de juicio oral, las siguientes probanzas:

TESTIMONIAL:

- 1.- Carlos Nicolás Quezada Salinas, nacido el día 12 de mayo de 2000, Subteniente de Carabineros.
- 2.- Camilo Aníbal Villagrán González, nacido el día 14 de marzo de 1996, Carabinero.
- 3.- Cecilia Andrea Osorio Huerta, nacida el día 14 de junio de 2001, estudiante.
- 4.- Michelle Valentina Ramírez Jara, nacida el día 29 enero 2002, estudiante.
- 5.- Constanza Valentina Saavedra Zúñiga, nacida el día 27 de febrero de 2002, estudiante.

EVIDENCIA MATERIAL:

- _ Una (01) mochila color negro, cadena de custodia NUE 6478603.

OTROS MEDIOS DE PRUEBA:

- 1.- Dos (02) imágenes contenidas en set fotográfico suscrito por el funcionario de Carabineros Camilo Villagrán González, correspondientes a las vestimentas del acusado.
- 2.- Cuatro (04) imágenes contenidas en set fotográfico suscrito por el funcionario de Carabineros Camilo Villagrán González, correspondientes a una bicicleta sin marca color negra y una mochila en cuyo interior se encontraron especies.

3.- Siete (07) imágenes contenidas en set fotográfico suscrito por el funcionario de Carabineros Camilo Villagrán González, correspondientes a las especies sustraídas y recuperadas.

SÉPTIMO: Prueba rendida por la defensa. Que la defensa se sirvió de las mismas probanzas incorporadas por el Ministerio Público, sin introducir elementos probatorios adicionales.

OCTAVO: Hechos acreditados. Que con el mérito de las probanzas incorporadas durante el juicio oral, las cuales fueron libremente apreciadas por el Tribunal, cuidando no contradecir los principios de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, se han podido tener por acreditados, más allá de toda duda razonable, los siguientes hechos:

El 31 de enero de 2023, siendo aproximadamente las 16:00 horas, en el interior del Parque Forestal, a la altura de calle José Miguel de la Barra, comuna de Santiago, Víctor Vicencio Álvarez Vásquez abordó a Constanza Valentina Saavedra Zúñiga, Michelle Valentina Ramírez Jara y Cecilia Andrea Osorio Huerta, quienes se encontraban sentadas en dicho lugar, procediendo primero a solicitarles dinero y luego a amenazarlas de agresión, exigiéndole la entrega de sus especies, exhibiéndoles un elemento similar a la empuñadura de un arma de fuego, que éste mantenía al interior de una mochila que portaba consigo, sustrayéndole a Saavedra Zúñiga un billete de diez mil pesos (\$10.000) y un teléfono iPhone 12, color morado; a Ramírez Jara la suma de seiscientos pesos (\$600) y dos teléfonos celulares, uno de ellos marca Samsung y el otro correspondiente a un iPhone 6S; y a Osorio Huerta la suma de cinco mil quinientos pesos (\$5.500) y un teléfono celular.

NOVENO: Valoración de la prueba. Que atendido el elevado estándar de certeza que debe alcanzar el órgano jurisdiccional para fundar una sentencia condenatoria en nuestro ordenamiento jurídico, tal cual fluye del artículo 340 del Código Procesal Penal, se hace necesario que el órgano persecutor rinda pruebas de alta calidad.

Sobre la base de dicha premisa, estos jueces estiman que, en lo atinente a la integridad de los extremos fácticos nucleares de la imputación, las probanzas de cargo sí lograron alcanzar tal requisito cualitativo, no vislumbrándose alguna otra hipótesis alternativa plausible capaz de generar una duda razonable.

En síntesis, tal cual se explicará, se incorporó el testimonio de las tres afectadas, quienes, en síntesis, dieron cuenta, de manera concordante, de un hecho sustancialmente coincidente con aquél que fuera consignado en la motivación precedente, asertos que necesariamente han de ser conectados con las declaraciones de los funcionarios de Carabineros que procedieron a la detención flagrante del acusado. Asimismo, es dable señalar que los relatos de las agraviadas contaron con elementos de corroboración externa, particularmente en lo concerniente al hallazgo, en poder del encausado, tanto de la práctica totalidad de los

teléfonos sustraídos, como de dinero en efectivo en una cantidad equivalente al desposeído a las afectadas.

Incluso más, y reforzando las conclusiones precedentes, huelga tener presente que el propio encausado, durante su declaración judicial, pese a haber negado el ejercicio de cualquier amenaza en contra de las víctimas, no sólo se posicionó en el contexto temporo-espacial en que sucedieron los eventos materia de este proceso, sino que además admitió, explícitamente, la circunstancia de que estas últimas se asustaron al percatarse de su presencia, agregando que en dicho contexto procedió a apropiarse del dinero efectivo y de los cuatro aparatos celulares que ellas mantenían consigo.

Lo anteriormente esbozado constituye, a modo de resumen, las consideraciones generales del Tribunal acerca de la prueba rendida en el juicio oral, aspecto que será desarrollado a continuación.

1.- En cuanto a los hechos consignados en el considerando octavo:

Sobre el particular, cabe indicar, según ya se adelantó, que los testimonios de las tres ofendidas fueron sustancialmente coincidentes entre sí en las siguientes circunstancias: i.- el contexto temporo-espacial en que sucedieron los hechos, esto es, que todas ellas se encontraban reunidas, el día 31 de enero de 2023, en horas de la tarde, en el Parque Forestal; ii.- que un sujeto de sexo masculino se les acercó pidiéndoles dinero, y que ante la negativa de ellas procedió a ponerse más violento, amenazándolas verbalmente que en caso de que no le hicieran entrega de sus pertenencias -en primera instancia dinero y posteriormente sus teléfonos celulares- las agrediría, advirtiéndoles además sobre la presunta presencia de otras personas, en las cercanías del parque que, ante cualquier solicitud de auxilio, atentarían en contra de ellas; iii.- que durante el accionar precedentemente mencionado, el aludido individuo les exhibió un objeto que, conforme a la representación de las agraviadas, impresionaba ser la empuñadura de un arma de fuego; iv.- que las víctimas, en el contexto amenazante ya referido, entregaron al referido sujeto tanto dinero en efectivo como un total de cuatro aparatos celulares; y v.- que el individuo que desplegó, respecto de las afectadas, todos los comportamientos descritos corresponde al acusado, al cual reconocieron en audiencia, mencionando, asimismo, mismo sujeto que fuera detenido, por personal de Carabineros, manteniendo en su poder tanto el dinero como tres de los cuatro teléfonos celulares sustraídos.

En tal sentido, en primer lugar, la afectada Cecilia Osorio Huerta indicó, en resumen, que el 31 de enero de 2023 fue víctima de un asalto con intimidación en el Parque Forestal, frente al museo Bellas Artes, ello en circunstancias de que estaba conversando con dos amigas de la universidad, de nombres Michelle y Constanza, las tres sentadas en dicho lugar. Agregó, que de repente se les acercó un tipo caminando, de unos treinta o cuarenta años, de estatura aproximada de 1.70 -metros-, moreno y de pelo corto, quien les pidió dinero para comer, respondiéndole que no tenían; después de eso -el mismo sujeto- les dijo “tienen que tener algo”, sacando de repente una mochila, la cual se puso por delante y les señaló que si no tenían

algo se iba a poner loco. Puntualizó, que frente a aquello le entregó cuatro o cinco mil pesos - en billetes- y una moneda de quinientos pesos; Constanza también sacó -y entregó- un billete, en tanto que de igual manera Michelle buscó dinero; el sujeto les dijo que no era suficiente, y que debían entregarle todas sus cosas, pues de lo contrario se iba a poner agresivo; entregaron sus celulares, y cuando Michelle cerró su bolso la persona vio que tenía otro teléfono. Añadió, que el mismo individuo les señaló que no pidieran ayuda ya que habían unos “locos” más allá que las iban a seguir y lastimar, metiendo -el mencionado sujeto- la mano en su mochila, agarrando algo, lo que -dicha afectada- supone era el mango de un arma, procediendo allí a entregarle todas sus pertenencias, luego de lo cual el individuo se subió a una bicicleta y se fue pedaleando.

Continuando con sus asertos, la mencionada víctima indicó que quedaron -ella y sus dos amigas- en shock, que se levantaron y empezaron a gritar; iban dos hombres pasando, a quienes contaron lo sucedido, yendo éstos en dirección al sujeto que les había robado. Adicionó, que Constanza visualizo “más allá” una patrulla de Carabineros, ante lo cual corrieron las tres y al llegar allí éstos -el personal policial- tenían sus celulares, pidiendo que los reconocieran; estaban los dos teléfonos de Michelle así como también el de Constanza, no recuperándose el de ella -de Cecilia Osorio-, pues le indicaron que el “tipo” había lanzado las cosas en diferentes direcciones; asimismo, encontraron el dinero. Preciso, frente a una pregunta de la Fiscalía, que la persona que les robó correspondía al acusado, al cual reconoció en la sala de audiencias.

Asimismo, la ofendida Michelle Ramírez Jara atestiguó, en resumen, que el día 31 de enero de 2023, aproximadamente a las 4:00 de la tarde, se juntó con dos amigas, Cecilia y Constanza, en el Parque Forestal, frente al museo Bellas Artes y al restaurant Castillo; estaban de espalda, conversando, y en un momento se les acercó un sujeto -reconociendo como tal acusado en la sala de audiencias-, quien primero les pidió dinero para comer, el cual vestía una polera azul con manchas negras, short negro y zapatillas negra, y tenía una mochila “hacia adelante”. Agregó, que dicho sujeto les pidió dinero, respondiéndole que no tenían, frente a lo cual éste se puso más insistente y violento, diciéndoles que le entregaran todo lo que tenían, pues si no lo hacían les iba a pegar, a matar, y que atrás habían unos tipos que las iban a perseguir; ante todo esto le pasaron toda la plata que traían, siendo el caso que ella sólo tenía, aproximadamente, seiscientos pesos en monedas, indicándoles luego -el mismo individuo- que le pasaran todo, ya que de lo contrario les iba a sacar la “chucha”. Puntualizó, que frente a ello Cecilia y “Coni” entregaron sus celulares; ella -la deponente- andaba con dos celulares, entregándole primero uno Samsung, logrando el individuo ver que tenía otro celular, un iPhone 6S, refiriéndole este último que si no se lo pasaba le sacaría la “cresta”, por lo que también se lo entregó. Añadió, asimismo, que cuando el individuo las amedrantó tenía “como” el mango de una pistola, y que cuando éste se fue se subió a una “bici”, al parecer negra.

Continuando con su declaración, la afectada Michelle Ramírez Jara manifestó que luego de lo sucedido empezaron a gritar de que les habían robado; habían dos hombres que empezaron a perseguirlo -al sujeto que las había acometido-, así como también habían unas mujeres, a estas últimas les pidieron el celular para poder llamar a sus familias. Indicó, asimismo, que “en eso” Constanza vio, a lo lejos, una patrulla de Carabineros, por lo que salieron corriendo -hacia dicha patrulla-, pudiendo percatarse que la persona -que las había asaltado- ya estaba dentro del auto -policial-, y que afuera habían dos Carabineros, uno de ellos con el celular de la “Coni”, el cual estaba hablando con el papá de esta última; los dos teléfonos de ella -de la deponente- se encontraban en la mochila de la persona -detenida-. Preciso, que Carabineros les pidió que “abrieran” los celulares, no siendo encontrado el teléfono de “Ceci”.

Del mismo modo, la agraviada Constanza Saavedra Zúñiga aseveró, de manera extractada, que el 31 de enero de 2023, mientras estaba junto a sus compañeras de universidad Cecilia y Michelle, sentadas en el Parque Forestal, frente al restaurant Castillo y al museo Bellas Artes, vino “de la nada” un varón de 1.70 -metros de estatura-, contextura gruesa, moreno, el cual vestía short negro, polera celeste con manchas de color, quien les preguntó si tenían plata para comer, contestándole que no. Agregó, que luego de ello el individuo se les acercó aún más, diciéndoles que -si no le entregaban dinero- se iba a poner súper “loco” y les pegaría, siendo el caso que de repente éste les dijo que entregaran todas las “hueás”, así como también que atrás habían otros “locos”, por lo que si hacían cualquier movimiento estos últimos las matarían. Puntualizó, que en ese momento el individuo sacó, desde una mochila, un mango de algo, indicándoles que las iba a matar si no le entregaban todas sus cosas, ante lo cual ella le pasó diez mil pesos; después se volvió más intimidante, amenazándolas nuevamente de muerte, y diciéndoles que tenía un arma y que no tenía miedo de usarla. Adicionó que atendido todo lo anterior, les entregaron sus celulares, pasándole ella su iPhone 12, avaluado en la suma de ochocientos mil pesos, luego de lo cual el sujeto se fue, tomando una bicicleta negra; una vez que este último se fue se dio cuenta de que nunca hubo otros sujetos.

Siempre en el contexto de su testimonio, la víctima Saavedra Zúñiga indicó que cuando el individuo se dio a la fuga llegaron dos hombres, a quienes le contaron lo que había pasado, corriendo estos últimos a buscarlo -al asaltante-. Indicó, asimismo, que cuando iban en dirección hacia el oriente del parque vieron una patrulla de Carabineros, dirigiéndose hasta donde éstos estaban, encontrándose allí con el delincuente ya retenido. Añadió, que Carabineros había recuperado el dinero, así como también sus celulares, menos el de Cecilia. Consultada la testigo sobre si la persona que la acometió se encontraba en la sala de audiencias, la deponente respondió afirmativamente, reconociendo como tal al acusado.

Por otra parte, se incorporó un segundo bloque de testimonios, correspondientes a los dos funcionarios de Carabineros, de dotación, a la sazón, de la 1ª Comisaría de Santiago, que procedieron, en un contexto-temporo espacial próximo al hecho sufrido por las afectadas, a la detención flagrante del encartado, atestados que, ciertamente, otorgaron una corroboración

externa a los dichos de las víctimas. De acuerdo a los mismos, en resumen, en circunstancias que efectuaban un patrullaje por el sector, unos transeúntes los alertaron sobre la perpetración de un robo, observando luego a un sujeto -el acusado- huyendo, quien cayó al suelo producto de una zancadilla realizada por otra persona. En tal sentido, manifestaron que éste mantenía en su poder varios teléfonos celulares, sin entregar, salvo respecto de uno de ellos -que sí era de su propiedad-, alguna justificación razonable sobre su porte, siendo el caso, además, que en ese contexto se acercaron las tres afectadas, las cuales manifestaron haber sufrido un robo momentos antes, quienes, además, reconocieron como suyos y desbloquearon los mencionados aparatos. Adicionalmente, los aludidos efectivos policiales afirmaron haber encontrado, en el interior de una mochila que el encausado traía consigo, dinero en efectivo en una cantidad equivalente a la sustraída a las agraviadas.

En este orden de ideas, el Subteniente Carlos Quezada Salinas indicó, en síntesis, que el día 31 de enero 2023, aproximadamente a las 16:00 horas, se encontraba realizando un servicio de segundo turno, en calle Merced, esquina José Victorino Lastarria, comuna de Santiago, y que en esas circunstancias vio corriendo, por calle Merced, en dirección al oriente, a un sujeto masculino que vestía polera celeste con manchas negras, zapatillas negras y un pantalón corto negro, respecto del cual los transeúntes del lugar sindicaban como autor de un robo. Agregó que dicho sujeto -el sindicado por los transeúntes-, ingresó al Parque Forestal, ante lo cual, junto con su acompañante -el Carabinero Villagrán González- procedieron a seguirlo, observando que una persona le efectuó una zancadilla, por lo que le dieron alcance y lo redujeron; una vez controlado el individuo, llegó otra persona que hizo entrega -al personal policial- de un teléfono del que éste se había despojado, concurriendo, acto seguido, otra persona con una bicicleta negra que el individuo reducido reconoció como de su propiedad.

Continuando con su testimonio, el Subteniente Quezada expresó que el sujeto, identificado como Víctor Vicencio Álvarez Vásquez, fue ingresado al carro policial, y que al efectuarse un registro a la mochila que portaba se encontraron dos teléfonos celulares -adicionales al ya entregado por uno de los transeúntes-, los cuales no pudieron ser desbloqueados por el detenido, así como también dinero; al cabo de unos minutos se acercaron tres mujeres al carro policial, solicitándoles ayuda. Añadió, que una de esas mujeres reconoció como de su propiedad un teléfono iPhone 12, color morado, el cual desbloqueó, en tanto que los otros -dos- teléfonos fueron reconocidos por otra “niña”; las víctimas además reconocieron como suyo el dinero.

De forma conteste con el anterior testimonio, el Carabinero Camilo Villagrán González indicó, de manera extractada, que concurría a declarar por un procedimiento efectuado el día 31 de enero de 2023, en cuya virtud fue detenido un sujeto masculino, quien llevaba zapatillas negras, short negro y una polera manga corta celeste con manchas color negro, el cual era sindicado por transeúntes del lugar, como el autor de un robo a unas mujeres en el sector del Parque Forestal. Agregó, que en esa oportunidad se encontraba de servicio de segundo turno,

junto al Subteniente Carlos Quezada, realizando un patrullaje preventivo en bicicleta; iban por Merced con José Victorino Lastarria, cuando observaron que varias personas gritaban que un individuo había cometido un robo, siendo el caso que un transeúnte lo seguía de cerca. Puntualizó, que cuando el sujeto sindicado por los transeúntes ingresó al parque forestal, una persona le provocó la caída con una zancadilla, lográndose con ello su detención por flagrancia; al proceder a su revisión, éste mantenía, en el interior de una mochila negra, tres teléfonos, llegando después una persona que entregó otro teléfono respecto del cual el sujeto se había despojado -durante su huida-; asimismo, momentos después se acercó otra persona, quien les hizo entrega de una bicicleta negra, que, según indicó, el referido sujeto había dejado botada. Precisó, que el detenido fue identificado como Víctor Vicencio Álvarez Vásquez.

Siempre en el contexto de su declaración, el Carabinero Villagrán González indicó que luego se acercaron tres mujeres mayores de edad, una de ellas llamada Constanza, la segunda Michelle, no recordando el nombre de la tercera, quienes refirieron haber sido víctimas de un delito de robo con intimidación, mediante el cual les sustrajeron sus teléfonos y dinero en efectivo. Adicionó que respecto de los teléfonos recuperados, uno de ellos, modelo iPhone, fue reconocido por la víctima Constanza, en tanto que los otros dos, correspondientes, respectivamente, a la marca Samsung y al modelo iPhone, pertenecían a la afectada de nombre Michelle. Puntualizó, que el dinero sustraído también fue encontrado en el interior de la mochila negra que el imputado portaba al momento de su detención.

En tercer término, y confiriendo sustento a todos los asertos analizados en este acápite, es menester recalcar que también se incorporó evidencia material y otros medios de prueba, atinentes, básicamente, a los teléfonos y dinero efectivo, recuperados con ocasión del procedimiento de detención del acusado, así como también, a las vestimentas que llevaba este último, la mochila que portaba, y la bicicleta con la que huyó luego de la perpetración de los hechos.

En efecto, las siete fotografías, capturadas por el funcionario Camilo Villagrán González, relativas a las especies sustraídas, ilustraron gráficamente a estos jueces en torno al hecho de haberse recuperado tres teléfonos celulares -uno de ellos perteneciente a la víctima Constanza Saavedra y los otros dos a Michelle Ramírez-, y dinero en efectivo, de una cuantía equivalente al entregado por las ofendidas, ascendente la suma total de \$16.500, distribuido en billetes y monedas. Asimismo, a través de las dos imágenes de las vestimentas del encartado, resultaron plenamente corroboradas las características de las prendas y del calzado que llevaba el acusado al momento de su detención, al ser plenamente coincidentes con las mencionadas, respecto de su hechor, por las víctimas Michelle Ramírez y Constanza Saavedra, esto es, polera azul o celeste, con manchas de color, short negro y zapatillas negras. Adicionalmente, las cuatro imágenes, correspondientes a una mochila negra y a una bicicleta, permitieron a estos jueces imponerse tanto acerca del elemento material utilizado por el encartado para guardar las especies sustraídas, como el medio de transporte utilizado para su huida del lugar de los

hechos. Por último, y más allá de su sobreabundancia, la incorporación de la mochila del encausado en cuestión, en carácter de evidencia material, otorgó aún más certeza sobre la incautación del elemento utilizado para la guarda de las especies sustraídas.

Para finalizar, cabe señalar que, adicionalmente, la declaración judicial del encausado también contribuyó a reforzar la convicción de estos jueces en torno a la ocurrencia de los hechos que se estimaron probados en este fallo. Sobre el particular, y más allá de que éste negó haber amenazado a las víctimas, aspecto respecto del cual el Tribunal se hará cargo en el acápite siguiente, igualmente tales asertos, explícitamente, lo posicionaron en el contexto temporo-espacial en que sucedieron dichos eventos, como asimismo, lo vinculan directamente con la apropiación de las especies de las ofendidas.

De acuerdo a los dichos del imputado, en síntesis, -el día de los hechos- estaba en el parque -Forestal- pidiendo dinero para comer, por lo que en un momento se acercó a tres “niñas” que estaban sentadas en el pasto, señalándoles “hola amigas, buenas tardes estoy en situación de calle”, ante lo cual éstas lo miraron y se asustaron, ya que llegó de improviso, respondiéndole una de ellas que no tenían dinero. Agregó, que les preguntó si tenían algo para comer, contestándoles que no; les habló con voz alta, por lo que sintió que ellas estaban asustadas; miró para todos lados, y vio que al costado de las piernas -de las tres jóvenes-, estaban sus teléfonos. Puntualizó, que una de ellas le dijo que tenía una moneda, regalándole mil pesos; al insistirles por otra “monedita” una de las mujeres le pasó unos billetes, y otra le entregó diez mil pesos, por lo que en total le regalaron “como” dieciséis mil pesos. Adicionó, que luego les dijo “sus teléfonos”, luego de lo cual “pescó” los teléfonos -de las víctimas- y se fue caminando, para luego tomar su bicicleta; iba con los teléfonos en la mano y un deportista le dijo “hey amigo y esos teléfonos”, por lo que se devolvió hacia el parque y entremedio de un árbol lo tiraron al suelo, llegando luego Carabineros, quienes lo detuvieron. Precisó, que después llegó una de las “niñas”, quien dijo “él es”; en ningún momento tuvo algún arma, y sólo vio que estaban los teléfonos en el suelo, por lo que se los trajo. Indicó, asimismo, que en total eran cuatro teléfonos, uno de ellos lo tenía en la mano una de las “niñas”, el cual se lo arrebató, en tanto que los otros se encontraban en el suelo. Añadió, que andaba con una mochila, y que las víctimas tenían entre veinte y veinticinco años, como asimismo, que estuvo con ellas entre tres y cinco minutos; ese día “andaba en la droga”, y que nunca tiró ninguna especie al suelo.

2.- Alegaciones de orden fáctico planteadas por la defensa:

En torno a este punto, la defensa, en la misma línea de la declaración de su representado, cuestionó que este último hubiese intimidado a las víctimas, aspecto que si bien, en principio, entronca con el análisis de uno de los elementos de la faz objetiva del tipo penal materia de la imputación, se encuentra indisolublemente ligado a cuestiones de índole probatorio. Lo anterior, puesto que se vincula con la incidencia que tendría la circunstancia fáctica, afirmada de manera conteste por los dos funcionarios de Carabineros que depusieron

en estrados, en orden a que al momento de practicarse la aprehensión del encausado éste no mantenía en su poder ningún arma de fuego, o de otro tipo, situación que, presuntamente, minaría la credibilidad de las afectadas, en tanto en cuanto éstas aseveraron que el acusado, durante su accionar, precisamente les exhibió un elemento que impresionaba ser el mango de una pistola.

Pues bien, esta sala estima que, en el caso concreto, la falta de hallazgo de algún elemento de estas características, con ocasión de la aprehensión del encausado, no constituye una circunstancia capaz de generar una duda razonable en estos sentenciadores, en los términos del artículo 340 del Código Procesal Penal, por las razones que seguidamente se expondrán.

En primer término, por cuanto el principio de libertad de prueba que rige nuestro ordenamiento adjetivo criminal, estatuido en el artículo 297 inciso primero del Código Procesal Penal, se asienta en la idea de que no cabe limitar de modo alguno los elementos de convicción a través de los cuales pueden tenerse acreditados los distintos extremos fácticos de la acusación, de modo tal que cualquiera de ellos, a diferencia de un sistema de prueba tasada, puede ser considerado idóneo para dichos fines. De ser aplicado el mentado principio al supuesto ahora analizado, la circunstancia de que un sujeto haya exhibido a las tres víctimas una pistola o, más específicamente, una parte de ella, puede ser acreditado mediante cualquier medio probatorio y, como contrapartida, conculca el mencionado principio cualquier conclusión que conduzca a desestimar su acreditación fundada exclusivamente en la falta de incorporación de evidencia material, fotografías u otras probanzas similares que den cuenta fehaciente de su incautación.

En segundo término, y conforme fuera desarrollado en el acápite anterior, las probanzas de cargo sí permiten concluir, más allá de toda duda razonable, la circunstancia de que el acusado exhibió a las agraviadas un elemento que, acorde a la representación de estas últimas, tenía la apariencia de ser la empuñadura o mango de un arma de fuego.

Lo anterior, por cuanto las tres perjudicadas, de manera conteste, afirmaron explícitamente dicha circunstancia, asegurando al efecto que el encartado, al momento de amenazarlas verbalmente de agresión a objeto de que le hicieran entrega de su dinero y teléfonos celulares, les mostró un elemento de esas características, el que mantenía en el interior de un bolso que portaba consigo. En tal sentido, y más allá de la falta de recolección de dicho elemento, no está de más señalar que no se vislumbró la existencia de ninguna motivación revanchista o interés espurio de parte de las afectadas respecto del encartado, máxime si éstas, por lo demás, recuperaron casi la totalidad de las cosas muebles sustraídas, situación que torna poco sostenible alguna mendacidad sobre este punto. Adicionalmente, no puede perderse de vista que las ofendidas, lejos de intentar agravar la situación del encausado, admitieron no haber visto fehacientemente el arma en cuestión, sino que, cosa distinta, un elemento que, conforme a su percepción, aparentaba ser la empuñadura de una pistola.

Así las cosas, resulta plausible concluir que la falta de hallazgo del arma en comento pudo obedecer a distintas razones; por ejemplo, que el encartado se haya desprendido de la misma durante su huida, tal como lo hizo con uno de los teléfonos sustraídos mientras era perseguido por transeúntes del sector o, también verbigracia, que éste simplemente no portó ningún arma para intimidar a las víctimas, de modo que lo exhibido a estas últimas no fue más que un objeto similar a una empuñadura de una pistola, situación plenamente plausible si se tiene presente, conforme lo afirmó en estrados el Carabinero Camilo Villagrán, que el imputado, al momento de su detención, mantenía, además de las especies sustraídas, un teléfono celular de su propiedad, de modo que perfectamente pudo haber mostrado una parte del mismo para fingir, dado el contexto coactivo, de que se trataba de la empuñadura de una pistola.

Por lo demás, resulta inconcuso el temor que experimentaron las víctimas al momento de ser acometidas por parte del imputado, el cual no sólo fue referido por éstas de manera concordante durante sus testimonios, sino que además fue reconocido por aquél en su declaración judicial, todo lo cual torna razonable el hecho de que éstas no fuesen capaces de asegurar fehacientemente de que lo que exhibido correspondiese a la empuñadura de un arma de fuego, sino que más bien la fracción de un elemento que el imputado hizo parecer como tal y que, dado el marco situacional, resultó ser idóneo para obtener, de manera coercitiva, la entrega de sus pertenencias.

Antes de finalizar este acápite, y siempre en lo tocante al tópico aquí analizado, es menester poner de relieve que en lo referente a la superioridad numérica de las víctimas en relación con el acusado, en este lugar únicamente se dirá que si bien el mismo concierne propiamente a un aspecto de índole normativo, y sin perjuicio de que en la especie tal superioridad numérica, como cuestión fáctica, resulta indiscutible, lo cierto es que la misma no se considera un elemento capaz de introducir alguna duda relevante respecto al ejercicio de intimidación por parte del segundo, con miras a la apropiación de las pertenencias de las primeras. Por el contrario, y conforme se indicará en la motivación siguiente, dicho elemento típico se estimó satisfecho sobre la base de una apreciación conjunta, y no parcelada, de la totalidad de las circunstancias fácticas concurrentes en el caso concreto, constitutivas, en opinión de la sala, de una amenaza con aptitud bastante para vencer la voluntad de las ofendidas.

DÉCIMO: Calificación jurídica. Que en concepto de estos jueces, los hechos que se dieron por establecidos en el considerando octavo de este fallo son constitutivos de un delito de robo con intimidación, previsto en el artículo 436 inciso primero, en relación con los artículos 432 y 439, todos del Código Penal.

En torno a la faz objetiva del tipo penal, el legislador ha exigido, en la modalidad que aquí interesa, que el agente, contra la voluntad de su dueño y con ánimo de lucro, intimide al sujeto pasivo con la finalidad de apropiarse de cosas muebles ajenas. En este sentido, el

artículo 439 ya referido conceptualiza la intimidación -así como también la violencia- prescribiendo a la letra que: “[p]ara los efectos del presente párrafo se estimarán por violencia o intimidación en las personas los malos tratamientos de obra, las amenazas ya para hacer que se entreguen o manifiesten las cosas, ya para impedir la resistencia u oposición a que se quiten, o cualquier otro acto que pueda intimidar o forzar a la manifestación o entrega. Hará también violencia el que para obtener la entrega o manifestación alegare orden falsa de alguna autoridad, o la diere por sí fingiéndose ministro de justicia o funcionario público”. De esta forma, en lo pertinente, corresponde analizar, en primer término, si existió una intimidación en conexión ideológica con una sustracción de especies, esto es, si se verificó una amenaza en contra de las víctimas enderezada a la apropiación de sus cosas muebles.

Sobre este punto, y conforme fuera además razonado en la motivación precedente, el Tribunal entiende que no cabe sino afirmar la concurrencia de una intimidación en los términos del artículo 439 del Código Penal. En un plano fáctico, estos jueces aprecian, en lo pertinente, una actuación compleja de parte del -único- sujeto activo del delito, consistente, en un principio, en la petición de entrega de dinero, para luego, frente a la negativa de las afectadas, pasar a referirles verbalmente que las agrediría -ya sea él mismo u otras supuestas personas que se encontraban en las cercanías del lugar- en caso de no hacerlo, procediendo, además, en ese contexto, a requerirles la entrega de sus aparatos celulares; asimismo, en el mismo marco situacional, el agente les exhibió a las ofendidas un elemento que, acorde a la representación de estas últimas, impresionaba ser la empuñadura de un arma de fuego.

En tal sentido, se cumplen los requisitos que doctrinariamente se exigen respecto de la intimidación, en el sentido de que la misma ha de constituir una amenaza seria, verosímil, grave e inmediata (Vgr., Jean Pierre Matus A./ María Cecilia Ramírez G., Lecciones de Derecho Penal, Parte Especial, 3ª ed., pp. 83-85).

En efecto, la circunstancia de haberse proferido amenazas verbales de agresión en contra de las víctimas, unida a la exhibición de un objeto que impresionaba ser, según la percepción de éstas, una parte de una pistola, rodeó de seriedad a la amenaza, dada la aptitud del mal amenazado para la afectación de bienes jurídicos de primer orden (vida e integridad física), cuestión que, además, dotó de gravedad a la misma. En torno a este punto, no puede perderse de vista, en el parecer de estos jueces, que no hace decaer la seriedad o gravedad de la amenaza la mera superioridad numérica de las agraviadas -todas mujeres menores de veinticinco años- en relación con el sujeto activo, puesto que adicionalmente a las circunstancias fácticas que rodearon la actuación del agente, la mayor corpulencia del acusado -no solo mencionada por las afectadas sino percibida por el Tribunal merced al principio de inmediación- tornó fútil a dicha superioridad numérica. Por su parte, el carácter verosímil de la amenaza aparece claro si se tiene en cuenta que, desde la perspectiva de las víctimas, esto es, según lo observado por aquéllas, ésta sería concretada en caso de rehuir la sustracción; siendo

además inmediata, por cuanto la concreción del mal amenazado iba a tener lugar, dadas sus características, sin solución de continuidad.

Por otra parte, y despejado lo anterior, cabe tener en consideración que la apropiación recayó sobre objetos materiales de las características exigidas por el legislador, a saber, sobre cosas muebles ajenas, toda vez que el accionar desplegado por el agente iba dirigido a la apropiación de dinero y teléfonos celulares de las afectadas.

En torno a la faz subjetiva del tipo penal, es dable concluir que el autor obró con dolo directo, esto es, que su objetivo era precisamente la realización del hecho delictivo. En efecto, la propia modalidad comisiva empleada, a saber, la intimidación, tanto a través de amenazas verbales como mediante la exhibición de un objeto que aparentaba ser una parte de un arma de fuego, para vencer la resistencia de las víctimas, seguida de la sustracción de cosas muebles ajenas de estas últimas, es reveladora por sí sola de tal circunstancia. Asimismo, el ánimo apropiatorio resulta claro habida cuenta de que el agente huyó del lugar de los hechos con las especies sustraídas. Finalmente, y en cuanto al ánimo de lucro, éste se configura en atención a la propia naturaleza de las especies sustraídas, dado, por una parte, la facilidad con que los teléfonos celulares son usualmente transados en el mercado informal y, por otra, en razón del atributo del dinero como medio de intercambio de bienes y servicios.

UNDÉCIMO: Iter criminis. Que desde la perspectiva de su grado de desarrollo, el ilícito de robo con intimidación, en concepto de estos magistrados, se encuentra consumado, al haber sido realizado, de manera completa, el hecho típico y antijurídico, puesto que tuvo lugar, de una parte, una intimidación en los términos del artículo 439 del Código Punitivo, dirigida, funcionalmente, a la apropiación de cosas muebles de las ofendidas, las cuales, en razón de dicha intimidación, efectivamente salieron de la esfera de resguardo y custodia de estas últimas.

DUODÉCIMO: Intervención del acusado. Que la intervención del encartado en el delito de robo con intimidación corresponde ser calificada de autoría ejecutiva, al haber sido precisamente éste, conforme a los hechos acreditados en el considerando octavo, la persona que realizó el hecho típico de forma directa, dolosa y de propia mano.

DÉCIMO TERCERO: Alegaciones relativas a circunstancias modificatorias de responsabilidad penal ajenas al hecho punible y demás factores relevantes para la determinación y ejecución de la pena. Que en la oportunidad procesal prevista en el artículo 343 del Código Procesal Penal, los intervinientes efectuaron las siguientes alegaciones:

1.- Ministerio Público:

Dicho interviniente, en primer término, incorporó el extracto de filiación y antecedentes del acusado, en el cual consta que aquél registra seis condenas, por crimen o simple delito, pretéritas a los hechos materia de la presente causa.

En segundo término, reiteró la pretensión punitiva indicada tanto en su alegato de apertura como de clausura, reproduciendo para ello los fundamentos ya esgrimidos en dichas oportunidades procesales.

Y, por último, manifestó oposición a la eventual aplicación de la minorante contemplada en el artículo 11 N°9 del Código Penal, toda vez que, en su concepto, y con total prescindencia a la declaración del acusado, tanto el ilícito como la autoría de éste igualmente se habrían tenido por acreditados, exclusivamente, sobre la base de la prueba de cargo.

2.- Defensa:

Solicitó, conforme al mérito de la declaración de su representado, que se diese aplicación a la atenuante prevista en el artículo 11 N° 9 del Código Punitivo, ello máxime si el Tribunal tuvo en consideración dichos asertos para fundar su decisión condenatoria, de modo que correspondía la imposición de una pena inferior a la requerida por el órgano persecutor.

DÉCIMO CUARTO: Atenuante de colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos. Que estos sentenciadores estiman que favorece al acusado la atenuante de colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos, contemplada en el artículo 11 N° 9 del Código Penal, única circunstancia modificatoria de responsabilidad criminal sometida a debate en estrados.

En efecto, según el parecer del Tribunal se configuran, en la especie, los presupuestos exigidos en el artículo 11 N° 9 del Código Penal, por cuanto si bien es efectivo que el encausado, conforme se razonó en el considerando noveno, negó cualquier tipo de amenaza verbal en contra de las ofendidas, o la exhibición de algún arma de fuego, de igual manera contribuyó, en una porción relevante, en la determinación de la verdad procesal.

Lo anterior puesto que éste, durante su declaración judicial, se posicionó en el contexto temporo-espacial en que acontecieron los sucesos que se estimaron asentados, admitiendo, además, haber solicitado dinero a las afectadas y que, frente a la negativa de aquéllas, procedió a hablarles en un volumen alto a fin de insistir en dicho requerimiento, logrando, en dicho contexto, y evidenciando el temor que experimentaban estas últimas, le hicieran entrega de dinero efectivo. Asimismo, por cuanto reconoció que, acto seguido a la entrega del dinero en cuestión, y luego de solicitarles la entrega de sus celulares, procedió a tomar los aparatos celulares de las agraviadas -e incluso arrebatando uno de ellos de las manos de una de las ofendidas-, afirmando, a mayor abundamiento, que toda la interacción con las víctimas se extendió por un lapso de tiempo de entre tres y cinco minutos. Tal información, recibida por el Tribunal en forma previa a la incorporación de la prueba de cargo, concerniente, en forma prístina, a uno de los elementos de un ilícito de la gravedad penológica del robo con intimidación, como lo es la apropiación de cosas muebles ajenas, procedente además de un sujeto que no tiene obligación alguna de declarar en juicio, ni de hacerlo en forma veraz, colma, en la especie, el requisito de sustancialidad que demanda el legislador.

En tal sentido, si bien, en principio, pudiera cuestionarse la mentada sustancialidad, dado que el encartado negó haber amenazado a las víctimas, lo cierto es que, de un lado, la minorante examinada no exige confesión alguna del imputado, a diferencia de lo que acontece, en contraste, con la circunstancia prevista en el numeral 8° del citado artículo 11.

De otra parte, la circunstancia de que la prueba de cargo, por sí sola, fuese apta para la acreditación de los sucesos materia de la imputación no resulta, en el caso concreto, un argumento decisivo a la hora de negar la concurrencia de la minorante analizada. En este orden de ideas, si bien es necesario exigir una cierta entidad a la cooperación para la configuración de la minorante en estudio, no se requiere en caso alguno que ella produzca “resultados concretos”. De esta manera, la misma ha de alcanzar el umbral de la “sustancialidad”, mas no el de la “efectividad”. Por el contrario, cuando lo requerido por el legislador se corresponde con una “efectividad” en la colaboración, así lo ha señalado expresamente, tal como lo hace, por ejemplo, en el artículo 22 de la Ley N° 20.000, a propósito de la denominada “cooperación eficaz”, cuyos efectos atenuatorios, por lo mismo, son marcadamente más intensos que la minorante ordinaria ahora examinada -rebaja de hasta tres grados de la pena-.

Adicionalmente, cualquier posibilidad de restringir el alcance de la atenuante estudiada únicamente a supuestos en que la colaboración llene vacíos de la prueba de cargo, además de carecer de todo respaldo legal, produce efectos marcadamente injustos en supuestos, como el analizado en el presente juicio, en que la detención del acusado se produjo en una hipótesis de flagrancia. Esto es, previa sindicación de transeúntes, de forma prácticamente coetánea al ilícito, y unido al hallazgo, en poder del imputado, de la práctica totalidad de las especies sustraídas. En este orden de ideas, la virtual exclusión de situaciones de esta clase conlleva, de facto, a un importante cercenamiento del ámbito de aplicación de la minorante, puesto que en las mismas el acusado, difícilmente, será capaz de entregar información, atinente a los hechos materia del juicio, diversa a la que resulta extraíble de la prueba de cargo.

DÉCIMO QUINTO: Determinación de la pena. Que sobre la base de la penalidad en abstracto contemplada en el artículo 436 inciso primero del Código Penal, y de conformidad con lo estatuido en el artículo 449, circunstancia 1ª, del mismo texto legal, se impondrá al imputado la sanción principal de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo.

En efecto, si bien resulta inconcuso que el ilícito en comento afectó a tres víctimas diversas, situación que, en principio, implica una extensión del mal causado superior a aquella que resulta inherente a la realización de dicha figura delictiva, estos sentenciadores consideran, en ejercicio de la potestad de discrecionalidad reglada que confiere la primera de las disposiciones legales previamente citadas, que concurren, en el caso concreto, factores que contrapesan tal mayor disvalor y que, consecuentemente, justifican la imposición de la sanción principal en el límite inferior del marco penal respectivo.

Lo anterior, en primer término, habida consideración de que dentro de las dos modalidades comisivas con que, alternativamente, puede ser perpetrado el hecho típico en comento, a saber, la violencia o la intimidación, fue desplegada esta última, la cual, a diferencia de la primera, no implica un ataque corporal directo en la integridad física del sujeto pasivo. En segundo lugar, fueron recuperadas, prácticamente, la totalidad de las especies sustraídas, incluido el dinero, con la sola excepción de uno de los teléfonos celulares, específicamente el perteneciente a la víctima Cecilia Osorio Huerta. Y, en tercer término, concurre una atenuante, según fuera razonado en la motivación precedente, en tanto que, por el contrario, no se estimó configurada agravante alguna.

Adicionalmente, y atento a lo prescrito en el artículo 31 del Código Penal, se decretará el comiso de la mochila incautada, custodiada bajo el N.U.E., por constituir uno de los instrumentos del delito. De la misma forma, habida consideración del claro tenor de lo dispuesto en el artículo 17 letra a) de la Ley N° 19.970, y en atención al delito materia de la presente sentencia condenatoria, se ordenará la determinación de la huella genética del sentenciado, previa toma de muestras biológicas si fuese necesario, y su inclusión en el Registro de Condenados.

DÉCIMO SEXTO: Forma de cumplimiento de la pena principal. Que atendida la extensión de la pena privativa de libertad que será impuesta, la misma deberá purgarse de manera real y efectiva, no resultando procedente, en consecuencia, la aplicación de ninguna de las sanciones sustitutivas previstas en la Ley N° 18.216.

DÉCIMO SÉPTIMO: Abonos. Que la pena principal deberá contarse desde el día 31 de enero de 2023, data a partir de la cual el encartado se encuentra ininterrumpidamente privado de libertad con motivo de esta causa.

En efecto, de una parte, y de acuerdo al mérito de la prueba rendida, la detención del acusado se produjo el mismo día en que fuera cometido el hecho delictivo, esto es, el 31 de enero de 2023; de otra parte, y conforme a la respectiva certificación practicada por la Jefa de Unidad de Administración de Causas y Sala de este Tribunal, la prisión preventiva fue decretada a su respecto el día 1° de febrero del mismo año, medida cautelar que se mantiene vigente a la fecha.

DÉCIMO OCTAVO: Costas. Que encontrándose el encartado privado de libertad con motivo de esta causa, y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 593 del Código Orgánico de Tribunales, se le eximirá del pago de las costas de la causa.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 1°, 7°, 14 N° 1, 24, 31, 28, 432, 436 inciso primero, 439 y 449 del Código Penal; artículos 17 y siguientes de la Ley N° 19.970; artículos 1°, 295, 297, 298, 323, 329, 340, 341, 342 y 348 del Código Procesal Penal; artículo 593 del Código Orgánico de Tribunales; y artículo 17 de la Ley N° 18.556, **SE DECLARA QUE:**

I.- SE CONDENA a **VÍCTOR VICENCIO ÁLVAREZ VÁSQUEZ**, ya individualizado, a la pena de **CINCO AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MÍNIMO**, y a la accesoria legal general de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, por su responsabilidad en calidad de **AUTOR DE UN DELITO CONSUMADO DE ROBO CON INTIMIDACIÓN**, tipificado en el artículo 436 inciso primero, en relación con los artículos 432 y 439, todos del Código Penal, cometido en la comuna de Santiago el día 31 de enero de 2023.

II.- La pena principal impuesta en el punto precedente será cumplida de manera real y efectiva, la cual deberá contarse desde el día 31 de enero de 2023, conforme fuera razonado en el considerando décimo séptimo.

III.- Se decreta el **COMISO** de una mochila color negro, custodiada bajo el N.U.E 6478603.

IV.- Atendido lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley N° 19.970, **se ordena**, previa toma de muestras biológicas si fuese necesario, **la determinación de la huella genética del sentenciado y su inclusión en el Registro de Condenados**.

V.- Se exime al acusado del pago de las costas de la causa.

VI.- Comuníquese la presente sentencia, en su oportunidad, al Servicio Electoral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N° 18.556.

Devuélvanse, en su caso, los medios probatorios incorporados materialmente al juicio oral y los antecedentes introducidos en la audiencia de determinación de la pena.

Una vez ejecutoriada, remítase copia autorizada de esta sentencia al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, a fin de que proceda a dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 468 del Código Procesal Penal.

Regístrese y oportunamente archívese.

Sentencia redactada por el juez Cristian Fuentealba Zamora.

RUC N° 2300120846-2

RIT N° 118-2024

Dictada por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, cuya sala estuvo integrada por los jueces titulares Cristina Cabello Muñoz, Cristian Soto Galdames y Cristian Fuentealba Zamora.